

## V. Problemas sociais

violencia interpersonal: salud pública y gobernabilidad

Roberto Briceño-León

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

MINAYO, MCS., and COIMBRA JR, CEA., orgs. *Críticas e atuantes: ciências sociais e humanas em saúde na América Latina* [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005. 708 p. ISBN 85-7541-061-X. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

## 36. VIOLENCIA INTERPERSONAL:

### SALUD PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD

*Roberto Briceño-León*

Aquella tarde Francisco le había dicho a su mamá que quería divertirse. Hacía más de un año que no había fiestas en el ‘club’, desde que lo cerraron por unos muertos, por eso él no quería perderse la rumba de la reapertura. Lo mismo pensaron sus amigos, y la sala estaba llena cuando cerca de medianoche se presentó el problema. Él no estaba en el lío, pero aquel *man* era su amigo y tenía que defenderlo. Bailaba con la novia tripeándose su changa cuando le dieron el botellazo a su amigo, nadie supo muy bien cómo empezó, pero así son las culebras. Las manos corrieron asesinas, y los brazos y las botellas saltaban con la luz de la disco. Las muchachas gritaban y retrocedían, pero Francisco se abalanzó sobre los cuerpos en batalla, sin saber hacia dónde ni por qué lo hacía, pero ese *man* era su amigo. Empujones, patadas y gritos llenaban y vaciaban el local cuando un picahielo atravesó el pecho de Francisco. Al prender la luz lo encontraron en el piso. No botó sangre. La calle se había llenado de curiosos y sorprendidos. Sólo los gritos desconsolados de la madre de Francisco seguían cuando llegó la policía.

Al amanecer comenzaron los preparativos. Pocos habían dormido completo y a las once de la mañana volvieron a encender la disco. El funeral continuaba con la fiesta. Colocaron la urna en el medio de la calle, y los fuelles de las cornetas vibraban a todo vapor con la música que a Francisco le gustaba. Los panas fueron llegando y la novia parecía por momentos que se iba a quebrar, pero los amigos la detenían, aguanta allí, sólo la madre tenía derecho a llorar. Los demás bailaban, brincaban, brindaban y le echaban cerveza encima del ataúd. Al comenzar la tarde, le jugaron un partido de fútbol. Francisco parecía arbitrar en el medio de la cancha, sus amigos lo rozaban mientras iban y venían hacia los arcos figurados en los extremos de la calle, a veces se acordaban de él y le ofrecían una pirueta. La música tronaba sin descanso, algunos bailaban y otros se preguntaban dónde habrían ido a esconderse los dueños del picahielo cuando de pronto las motos se encendieron. Había que darle un paseo. Con mucho cuidado, amarraron la urna sobre las parrillas de las dos motos, y lentamente le dieron su última vuelta por las calles del barrio antes de llevarlo al cementerio. No hubo disparos al aire, ni llantos, ni amenazas, pues a sus catorce años Francisco no era un malandro sino un pana tipo normal, uno más que no estaba en ese lío, pero que murió porque ese *man* era su amigo...

## LA VIOLENCIA INTERPERSONAL

La muerte de Francisco es sólo una entre las 120.000 muertes violentas que, según la Organización Panamericana de la Salud, ocurren cada año en América Latina (OPS, 2003). Su historia, banal e intrascendente, parece repetirse en los distintos barrios, comunas, favelas o villas miseria de las ciudades de América. No hay heroísmo, sólo la lucha por sobrevivir en un mundo canibalizado en su cotidianidad. No hay ideologías, tampoco sueños ni arrojo. Hay apenas un rostro que salvar en el esfuerzo por hacerse grandes, por sostenerse como hombres, por defender a la novia o la familia en una tarde cualquiera.

La Organización Mundial de la Salud establece una clasificación de la violencia entre: a) la violencia interpersonal, que serían los homicidios y lesiones producto de acciones intencionales, sean éstas producto de la pasión personal, los conflictos, las venganzas o los robos; b) la violencia autoinflingida, que serían los suicidios o las automutilaciones; y c) la violencia colectiva, que son fundamentalmente las guerras entre países, etnias o fracciones políticas (WHO, 2002). Este trabajo se relaciona exclusivamente con la violencia interpersonal. Aunque la violencia existente en Colombia, con sus cuatro ejércitos en pugna –tres ilegales y uno legal– pudiera ser clasificada para algunos fines como colectiva, por la manera en que ocurre nos parece apropiado seguir tratándola dentro de la violencia interpersonal.

Siguiendo esta clasificación, la OMS establece que la violencia interpersonal es la primera causa de muerte en las personas de entre 15 y 44 años en los países de ingresos bajos y medios de las Américas (WHO, 1999), es decir, en América Latina y el Caribe. A partir de los 45 años de edad, los homicidios descienden al séptimo lugar, y después de los 60 años desaparecen como causa de muerte.

Los suicidios representan también una carga importante en América Latina: unos 55.000 cada año (OPS, 2003). Pero eso es la mitad de las muertes que ocurren violentamente en un continente que no está en guerra, pues salvo en Colombia –donde existen facciones armadas enfrentándose entre sí y con el ejército regular– no hay guerras abiertas en ningún país: sólo los conflictos de baja intensidad de las calles y los fines de semana.

Las tasas de homicidios de 12 países de América Latina están por encima de los dos dígitos, cuando la tasa mundial de homicidios es de 8,8 por cada 100.000 habitantes (WHO, 2002). En los países de Europa Occidental o en Japón, las tasas están entre 1 y 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en México la tasa es de 18 homicidios, en Brasil es 28, en Venezuela es 35 y en Colombia, 65 homicidios por cada 100.000 habitantes (Tabla 1).

Tabla 1 - Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes - Países seleccionados

Promedio mundial	8,8
México	15
Brasil	28
Venezuela	35
Jamaica	44
El Salvador	45
Guatemala	50
Honduras	55
Colombia	65

Fuentes: OPS,2003; WHO2002.

Medido en términos de la carga de la enfermedad (Murray & López, 1996), la violencia interpersonal se ubica en el tercer lugar en el grupo de los 15 a 44 años de edad, sólo por detrás de la depresión unipolar y la dependencia alcohólica, con un total de 3,4 millones de ‘años de vida saludable perdidos’ (AVAIS en castellano o DALYs en inglés)<sup>1</sup> (WHO, 1999). Los AVAIS o DALYs, como medición de la mortalidad prematura y de los años de vida saludable perdidos, se ven muy afectados por la edad de las personas que sufren la violencia y que son fundamentalmente jóvenes.

## SU IMPACTO EN EL SECTOR SALUD

La violencia afecta de manera importante a la salud pública, puesto que los esfuerzos que hace la sociedad por mantener sanos a sus niños y jóvenes sufren un revés importante con la muerte o lesión de sus jóvenes o adultos jóvenes. La carga de la enfermedad es importante en este aspecto, pues se trata de individuos sanos que sufren un impacto en su salud o su vida por motivos externos y que la mayoría de las veces pueden ser prevenidos. Pero tiene también varios impactos más sobre el sistema de atención a la salud.

En primer lugar, la violencia dificulta la atención médica, pues tanto el personal de salud como los pacientes se ven limitados para asistir a los centros de atención. En los lugares pobres de las ciudades, los médicos o enfermeras no aceptan las asignaciones de trabajo por temor a ser víctimas de la violencia. Un estudio de la OIT (2003) reporta que una cuarta parte de los

<sup>1</sup> DALYs es una unidad de medida que se desarrolló para poder estimar la carga global de la enfermedad. Se calcula tomando el tiempo promedio de incapacidad transitoria que produce una enfermedad y los años de vida perdidos que resultan al comparar la edad promedio de muerte por una enfermedad con la expectativa máxima de vida alcanzada en la sociedad.

accidentes laborales ocurridos en un contexto de violencia son en el sector Salud. En los ambulatorios o lugares de atención primaria de salud, los horarios se ven reducidos por el miedo que tienen sus empleados a ser atacados. Así, los hospitales comienzan a disponer de costosos servicios de vigilancia para proteger a su personal, ya que los enfrentamientos y las venganzas se han trasladado al interior de los centros hospitalarios, donde los maleantes procuran completar los asesinatos que no pudieron llevar a cabo en las calles.

En segundo lugar, la violencia retrasa los programas regulares de los centros hospitalarios. La planificación de las operaciones se ve regularmente alterada por el alto número de heridos que deben ser intervenidos de emergencia, convirtiéndose en las principales y casi únicas operaciones que pueden realizarse.

En tercer lugar, desvía recursos materiales que pudieran destinarse a otros propósitos. En algunos hospitales de Venezuela, los insumos hospitalarios y quirúrgicos del mes son consumidos durante el primer fin de semana para realizar operaciones de emergencia a víctimas de la violencia. Esto crea una situación dramática, pues no pueden atenderse otras dolencias y tampoco hay cómo cuidar de las nuevas víctimas de la violencia que van llegando los fines de semana siguientes. La Escuela de Salud Pública de Rió de Janeiro tuvo que clausurar durante un tiempo una fachada de su edificio por temor a los disparos que llegaban por peleas entre bandas en la favela vecina, y fue necesario realizar una importante inversión para sustituir las tradicionales ventanas por otras de hierro que sirvieran de coraza para las balas perdidas. Algo similar ha ocurrido en algunos centros hospitalarios de Venezuela, donde pacientes o médicos han sido asesinados en los consultorios por balas sin destino, pero no han tenido recursos para emprender una renovación del edificio tan importante como la llevada a cabo en Brasil.

En cuarto lugar, la violencia desplaza poblaciones de una zona a otra del país, llevando sus problemas y enfermedades hacia otros lugares y exponiéndose a nuevas enfermedades en los lugares de recepción, donde tienen dificultades para ser atendidos por los centros de salud.

Finalmente, la violencia dificulta la ejecución de los programas de control de enfermedades transmisibles, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. En las zonas rurales, tal y como ocurre en la frontera venezolano-colombiana, los programas de control de malaria se han visto paralizados por la acción de la guerrilla y los paramilitares. Por un lado no pueden aplicarse los programas de rociamientos; por el otro, las personas no quieren reportar y ser tratados de sus enfermedades, pues éstas pueden delatarlos ante las autoridades o exponerlos a ser víctimas de violencia en los puestos de salud.

Esta violencia representa, además, serios daños a la economía de los países: importantes recursos –que podrían ser utilizados para el bienestar de las familias o la acción del Estado– son desviados para prevenir o enmendar los daños de la violencia. Adicionalmente, otra parte importante de la actividad económica es inhibida por el temor a ser víctima. Una buena parte de los presupuestos nacionales es dedicada a la seguridad de las personas, de manera creciente

las personas consideran como insuficientes los recursos asignados por los gobiernos para estos propósitos y exigen una mayor inversión en el área, en detrimento de otras tan importantes como educación o salud. Las familias, por su parte, no se sienten protegidas por la seguridad pública y proceden sistemáticamente a invertir más recursos del presupuesto familiar en el cuidado de bienes y defensa personal. Los mecanismos privatizados de seguridad tienen muchas nuevas modalidades, pero todas significan una sustitución poco eficiente en términos económicos de las funciones de protección.

Significa también una inhibición importante de la actividad económica, pues las personas dejan de realizar un conjunto de actividades que motorizan la economía: por el temor a ser víctimas, se produce una disminución importante en las horas dedicadas al trabajo, pues los trabajadores se inhiben de tomar horas extras o cumplir horarios nocturnos, mientras que los estudiantes limitan sus horas de estudio. Por otra parte, el mismo temor que desencadena la violencia hace que los ciudadanos reduzcan sus horas y lugares de diversión, o para salir de compras, con lo cual se reduce la actividad comercial y se mengua la calidad de la vida de los ciudadanos. El estudio Activa (Tabla 2) impulsado por la OPS mostró que estas restricciones pueden alcanzar al 63% de la población en el caso de las compras, y al 73% en el caso de la recreación; es decir, una porción muy importante de los habitantes de las urbes.

Tabla 2 - Inhibición de la actividad comercial y de recreación en ciudades seleccionadas

	Cali	Caracas	Río de Janeiro	San José de Costa Rica	Santiago de Chile
Limitó sus compras	41,1	62,5	30,9	63,3	45,2
Limitó su recreación	43,9	72,7	47,6	55,1	33,1

Fuente: Laco - Datos del Proyecto Activa.

Todo esto significa oportunidades inhibidas para el desarrollo de estas sociedades, pues los recursos que podrían servir para incrementar las oportunidades de empleo y creación de riqueza para la sociedad son distraídos hacia otros propósitos (Londoño y Guerrero, 2000). Este impacto significó en la región una utilización de entre el 1% y el 5% del PIB para la protección contra la violencia o el cuidado de sus daños, lo cual es, en algunos casos, una cifra similar a toda la inversión realizada en el sector Salud o educación en algunos países.

## ¿QUÉ PASA?

Desde los años 80 se ha visto un incremento importante de la violencia interpersonal en el mundo y en América Latina. La Asamblea Mundial de Salud de la OMS declaró en 1996 que la violencia era un problema importante de salud pública en el mundo. Lamentablemente, desde ese año la situación no ha hecho sino empeorar en América Latina. ¿Qué ha pasado, que estamos y continuamos en esta epidemia de violencia?

Quisiéramos proponer dos hipótesis de trabajo. Por un lado, que se trata de un problema de ‘sociabilidad’, es decir, de la manera de vivir en sociedad, de ser sociedad, del modo de estar juntos. Por el otro, de un problema de ‘governabilidad’, es decir, de la manera en que se ejerce autoridad y el poder para regular ese modo de estar juntos.

Asumimos esta perspectiva macrosocial porque las magnitudes y la persistencia del fenómeno hacen casi imposible un tratamiento individual o grupal, aunque estos factores son muy importantes en la comprensión de lo que sucede.

Hay un problema de sociabilidad por las dificultades e incoherencias que significan las sociedades con una modernidad inconclusa, donde existen muchos de los rasgos y posibilidades de la modernidad. También hay otras poblaciones –y otros modos de vida– que no han alcanzado las formas de sociabilidad de la modernidad, aunque tampoco puede decirse que pertenecen o tienen modos de vida de la sociedad tradicional.

El proceso de globalización ha tenido un fuerte impacto en América Latina y aún estamos en medio de un proceso que no sabemos cuándo concluirá. La vida cultural de los países de la región está completamente globalizada, los sectores más pobres viven de las aspiraciones del mundo complejo contemporáneo y en el medio del Amazonas, en una vivienda miserable de piso de tierra y techo de palma a la vera de un río, sin carreteras ni electricidad, encontramos una familia que se conecta por televisión con una antena parabólica para ver el partido de fútbol que se lleva a cabo en el otro lado del mundo. Ya no se trata de las sociedades en transición que la sociología de los años 50 procuraba describir (Germani, 1961); se trata de un fenómeno distinto, por la magnitud de su impacto y la coexistencia de circunstancias que generan la exclusión e inclusión de los beneficios de la modernidad que se dan simultáneamente. En México se calcula que se han perdido más de 250.000 empleos de las industrias maquiladoras en los últimos tres años, por el impacto que ha tenido en los Estados Unidos la creciente importación de productos manufacturados e importados de China; la maquila mexicana fue un producto de la globalización, su posible destrucción, también. En casi todos los países de la región, los teléfonos celulares han superado en número a los teléfonos fijos, entre otras razones por la inmensa cantidad de estos aparatos que usan las poblaciones pobres y segregadas de las ciudades que nunca llegaron a obtener un servicio regular de telefonía.

Todo esto ocurre en un contexto de estancamiento o recesión muy importante en la región que produce un incremento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. El muy modesto

crecimiento del PIB –que para el año 2002 se había estimado en la región en 1,5%– se convirtió en estancamiento, se negativizó y luego se transformó en -0,6%. Así, el PIB *per capita* se mantendrá en 2% por debajo del alcanzado en 1997, y así también se elevaron a seis los años continuos perdidos en la actividad económica de la región (Cepal, 2003).

Esta situación llevó a que la desocupación urbana alcanzara a 17 millones de trabajadores en el año 2002 –para una tasa de 9,2%, la más alta en los últimos 22 años, es decir, desde que existen estadísticas confiables. Esta tasa de desempleo urbano es superior a las otras tres alzas que se registraron en momentos críticos de la economía regional: el primero fue de 8,4% y se registró durante la crisis de la deuda externa en 1983, durante la década perdida; el segundo fue de 7,9% y tuvo lugar durante la devaluación mexicana de 1996; y el tercero fue durante la reciente crisis asiática de 1999, cuando el desempleo llegó a 8,9% (OIT, 2002).

La Cepal estima que en América Latina hay 225 millones de pobres en el año 2003 –100 millones de entre ellos considerados indigentes– y que la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, se ha estancado en diez de los once países estudiados en la región. Sin embargo, la disponibilidad de alimentos permitió disminuir la población subnutrida en 20 de los 24 países de América Latina y el Caribe. Sólo en cuatro países se incrementó la desnutrición: Guatemala, Venezuela, El Salvador y Cuba (Cepal, 2003).

En ese contexto se ha dado un incremento importante del individualismo; hay una mayor conciencia de los derechos individuales, de la responsabilidad individual y de las aspiraciones de la persona, pero sin una contraparte de organización de la sociedad y de aceptación de las limitaciones y responsabilidades de la vida social. En el plano de los derechos se plantea que existe una conciencia muy valiosa de los derechos ciudadanos, pero que no tiene una contraparte igualmente aceptada y cumplida en los deberes. Hay una fuerte conciencia de sus propios derechos, pero no así de los derechos del otro. Se trata de una incorporación cultural y una inserción práctica en la economía mundial globalizada que no tiene sus correspondientes beneficios económicos (pues la gente tiene sueños dolarizados y debe pagar los productos del confort globalizado en dólares, pero no recibe su ingreso en dólares), ni tampoco ha internalizado las responsabilidades, ni el imperio de la norma y la ley abstracta que el individualismo y la modernidad también demandan.

En ese contexto social, se plantea como un gran desafío la gobernabilidad de las sociedades y el ejercicio de la democracia. Desde el punto de vista político hay un conjunto de normas que pueden cumplirse en mayor o menor grado, pero desde la perspectiva de la vida social no se logra un modo aceptable de estar juntos para los distintos grupos sociales. El sistema normativo tampoco funciona como para ser aceptado por todos los ciudadanos, ya que no logra persuadir a las personas ni tampoco puede imponerse por la fuerza. Es decir, los mecanismos de control social tradicional han dejado de funcionar y el sistema de control social penal no logra imponerse, ni las sociedades tienen capacidad para hacerlo cumplir. Si Colombia o Venezuela pretendieran aplicar las órdenes de detención emitidas, no alcanzarían las cárceles que existen en esos países para albergar a tal número de personas.



Pero el crimen organizado por un lado y la gran difusión de armas de fuego personales por el otro significan una amenaza permanente a la gobernabilidad. La idea weberiana del Estado como el ente que arrebató la violencia de los actores sociales particulares y la monopolizó, es cada vez menos cierta en la región. Los carteles de la droga y los grupos guerrilleros –separados o en conjunto– continúan representando un desafío a la gobernabilidad en muchos países. Pero más allá de lo circunstancial, lo que pareciera estar en cuestión es la capacidad y manera de gobernar sociedades altamente estratificadas y desiguales.

Sociabilidad y gobernabilidad constituyen entonces las dos dimensiones con las cuales proponemos intentar comprender el drama de la violencia en América Latina. Veamos de manera sucinta algunas de las aplicaciones de esta interpretación.

## LOS PROBLEMAS DE SOCIABILIDAD

### Los jóvenes y su integración a la vida social

La violencia juvenil parece ser el rostro más fuerte y dramático de los homicidios que ocurren en la región. Los jóvenes son –a la vez– las víctimas y los victimarios más importantes; los jóvenes matan y mueren con una ligereza sorprendente. A nivel mundial, la tasa de homicidios de los jóvenes de entre 15 y 29 años es de 19,4 por cada 100.000 habitantes, la más alta de todos los grupos etarios (WHO, 2002). Pero, ¿qué sucede con los jóvenes?

Lo que se observa en la hipótesis de la sociabilidad es una incapacidad de la sociedad para incorporarlos a la vida social prescripta. El modelo del joven adolescente formulado por la sociedad, por medio del cual éste se mantiene en la escuela al menos hasta los 15-16 años de edad y una vez salidos de la formación entrarían en el mercado de trabajo, no puede ser satisfecho con los mecanismos que tiene establecidos la sociedad para tal fin. En una proporción importante, el sistema educativo no logra mantenerlos en la escuela más allá de los 12-13 años, que es la edad en la cual se produce de manera importante la deserción escolar. Tampoco puede insertarlos en el mercado de trabajo, porque en muchas de las legislaciones está expresamente prohibido emplear a menores de edad (definidos como 16 ó 18 años) o porque de manera objetiva no hay puestos de trabajo donde puedan emplearse.

El desempleo juvenil duplica la tasa de desempleo general de casi todos los países de América Latina (OIT, 2002) y se considera que al menos uno de cada cinco jóvenes está desempleado. ¿Qué oportunidades tiene entonces un joven con todas las aspiraciones de la modernidad y la globalización, pero que no llega a los 9 años de estudio y sólo puede aspirar a un trabajo con el salario mínimo, si es que lograra emplearse?

En Venezuela, las cifras oficiales más conservadoras consideran que hay 173.000 jóvenes desempleados. Los datos no oficiales pueden duplicar estas magnitudes, pero asumamos la cifra más baja. Si consideramos que hay 173.000 jóvenes que no estudian y están desemplea-

dos, y postulamos la tesis de que el 90% de ellos tienen un contexto familiar y social que los mantiene fuera del riesgo de caer en el tráfico de drogas o la delincuencia, nos queda entonces un 10% en situación de riesgo, una décima parte de todos los jóvenes. Pero estamos hablando de 17 mil jóvenes en riesgo de caer en la violencia, y esta es una cantidad similar a toda la población recluida en las penitenciarías del país. Ahora bien, si las cifras de la Organización Internacional del Trabajo indican que hay 19 millones de desempleados –de los cuales 7 millones son jóvenes– y aplicamos el mismo cálculo, estaríamos hablando de 700 mil jóvenes en riesgo de la violencia. Las magnitudes asombran porque este es el fenómeno social ante el cual nos enfrentamos.

Tabla 3 - Tasa anual de desempleo juvenil en países de América Latina

País	Edad	Porcentaje de desempleo
Argentina	15-19	46,1
Brasil	15-17	17,0
	18-24	14,0
Chile	15-19	28,1
	20-24	20,7
Colombia	12-17	31,8
	18-24	33,4
México	12-19	6,7
	20-24	5,2
Perú	14-24	15,1
Uruguay	14-24	38,4
Venezuela	15-24	26,4

Fuente: OIT, 2002, Cuadro 3-A.

Estos jóvenes desempleados quedan literalmente en la calle: por lo general no tienen hogares gratos donde vivir ni actividades para entretenerse en el hogar. Además, los requerimientos de socialización propios de la edad los llevan a integrarse en bandas, pandillas, maras o barras bravas (Cruz y Portillo, 1998; Iudop et al., 2001; Santacruz y Portillo, 1999; Santacruz y Concha, 2001). La banda proporciona una identidad colectiva que sustituye o apoya la todavía muy precaria identidad individual. Las pandillas juveniles agrupan a más de 30 mil jóvenes en Honduras y El Salvador, y a más de 8 mil en Nicaragua (OPS, 2003). La calle es el lugar privilegiado de su actuación, se convierte en su hogar (Márquez, 1999) y desde allí se despliega el riesgo a ser víctima de la violencia o a convertirse en violento, en respuesta a las amenazas que debe soportar.

Varios estudios recientes muestran la dinámica social del respeto y la construcción de la masculinidad en la violencia de los jóvenes. El asunto aquí es que adicionalmente – con independencia de los problemas de la exclusión del sistema educativo y del desempleo– el proceso de construcción de la adultez se ve marcado por una necesidad de afirmar su masculinidad, ya que la cultura del género induce a un conjunto de comportamientos responsivos de los retos y las afrentas que obliga al ejercicio de la violencia. Pero no sólo debe mostrar su masculinidad, sino que debe obtener el respeto que le permita sobrevivir en un mundo de agresiones y venganzas, y sólo con la crueldad, con el ejercicio exagerado y abusivo de la violencia podrá obtener ese deseado respeto (Zubillaga y Briceño-León, 2001; Zubillaga, 2003).

Ese joven varón y pobre tiene todas las expectativas de su edad y de la globalización, pero un no-lugar en la vida social que le permita satisfacerlas. Ese es el principal incentivo para asumir el camino de la violencia y encontrar allí el sentido a su vida.

### **La violencia doméstica y los roles cambiantes de la pareja**

La violencia en la pareja se ha vuelto un asunto de relevancia en los distintos países, pues ha empezado a mostrar un problema que estaba oculto y silenciado. Los datos no son claros ni fidedignos, pero muestran los inicios del conocimiento de un fenómeno antiguo que tiene nuevos matices por los roles cambiantes en la pareja. Los cambios en la mujer de América Latina son de una velocidad sorprendente en el área educativa y laboral; sin embargo, el 45% de las mujeres mayores de 15 años no tiene ingresos propios, frente al 21% de los hombres (Cepal, 2003), lo cual las mantiene en situación de vulnerabilidad frente a la viudez o las separaciones matrimoniales. Pero ese 55% que sí tiene ingresos, hace grandes contribuciones y empieza a exigir un trato distinto que no ha ido acompañado de cambios concomitantes en los hombres. La mujer ha cambiado mucho y los hombres, poco. Ese conjunto de cambios desiguales presenta uno de los problemas de sociabilidad que no logran resolverse y donde la violencia es un síntoma (PNUD-AVESA, 1999). Un estudio que hicimos en Caracas sobre la violencia en la pareja nos mostró que los hombres golpeaban a las mujeres en el mismo tenor y magnitud que las mujeres golpeaban a los hombres (Briceño-León, Ávila & Camardiel, 1998). La situación reportada en la encuesta puede tener muchas interpretaciones, pero una de ellas es que las mujeres ya no se dejan golpear sin responder. Ha habido un cambio importante en la mujer frente a la agresión sufrida de parte de su pareja; para algunos quizá no sea un cambio en la dirección adecuada, pero es un cambio al fin.

La mujer ha tomado mayor control de su sexualidad y su maternidad, y si a esto se le suma una mayor confianza derivada de su nivel educativo y mayor independencia –producto de su incorporación laboral–, las transformaciones son muy grandes en relación con los pocos cambios en los roles y seguridades de los hombres. Las relaciones de pareja están en una crisis importante de redefinición de sus roles y responsabilidades; no es casual que se haya incrementado el número de divorcios. Lo que nos parece es que la violencia hacia la mujer, definida en el contexto clásico de un hombre machista y una mujer frágil y sometida, está en retroceso.

La violencia que se presenta ahora se debe a los cambios en la mujer, la no aceptación en los cambios de rol de parte de los hombres, y por la incapacidad de hombre y mujeres para resolver en otros términos el modo de vivir en pareja.

### **El lugar confuso de los ancianos**

La OMS destaca, en su informe mundial sobre la violencia (2002), a la violencia hacia los adultos mayores como un problema novedoso e importante. En general, se reconoce que hay muy poca información sobre las agresiones que sufren los ancianos, pero desde los años 70 se han venido realizando estudios y se ha empezado a detectar que muchos de los antiguos problemas y accidentes eran una mezcla de negligencia y agresión hacia este grupo etario. Las sociedades han sufrido un incremento importante de la población adulta mayor a partir de la disminución de las tasas de fecundidad y de la prolongación de la esperanza de vida. En la sociedad tradicional los ancianos ocupaban un lugar privilegiado, pues la alta mortalidad hacía que fueran pocos, y por lo tanto representaban la tradición y la sabiduría de una sociedad que repetía el pasado. Pero el incremento de ancianos en América Latina ha dado un cambio importante en las relaciones familiares, la 'abuelidad' ha tenido cambios notables por las nuevas circunstancias sociales y el sistema tradicional de ocuparse de los ancianos en las casas ha perdido vigencia, pues la vida de las parejas se ha hecho distintas: las casas son más pequeñas y los ancianos quieren una vida más tranquila e independiente, pero no están dadas las condiciones para satisfacer esto. Los sistemas de seguridad social o de pensiones con capacidad para garantizar un retiro tranquilo existen en pocos países, y las posibilidades de mantenerlos las familias en la vida urbana se hacen más difíciles. En esa suma de dificultades, el anciano se vuelve una carga, un problema, y es susceptible de sufrir actos violentos por partes de familiares y allegados, pues no tenemos aún el nuevo modo de vivir juntos con nuestros ancianos, y el antiguo ya no funciona en las ciudades, al menos, no como antes.

## **LOS PROBLEMAS DE LA GOBERNABILIDAD**

Estas dificultades en la sociabilidad se ven acentuadas por la crisis del sistema de control social tradicional en las sociedades de América Latina. Aunque en grado diferente, los mecanismos tradicionales de socialización de los individuos como la religión y la escuela, han perdido su fuerza e incidencia en la conducta de los individuos. Esto tiene un impacto muy grande, aunque resulte casi imperceptible en la gobernabilidad de esas sociedades.

La gobernabilidad de las sociedades tiene su fundamento en la construcción de un consenso social y en la capacidad del Estado de gestionar los intereses particulares y las demandas de convivencia de los distintos actores sociales. En la construcción del consenso, el control social tradicional tiene una función de mucha importancia, pues permite la aceptación del mundo real con sus potencialidades, limitaciones, insatisfacciones y hasta injusticias de siempre. La religión y la escuela han cumplido un papel fundamental en este proceso de control social

tradicional; esencialmente la religión, porque le da sentido a la vida y sobre todo al sin-sentido de la muerte. La escuela, por su parte, porque prepara y habitúa para los roles sociales preestablecidos, porque educa en la aceptación tanto de los caminos sociales prescritos como de los lugares sociales que la división social asigna a los individuos como destino. Destino inexorable en las sociedades de castas y probabilidad cierta en las sociedades de clases.

La reproducción social requiere de la escuela y la religión como ideologías permanentes para la continuidad de una determinada vida social. Pero cuando estas instituciones pierden su fuerza en la sociedad moderna, el papel central pasan a ocuparlo las leyes, que sustituyen los diez mandamientos del cristianismo. El problema de las sociedades de América Latina es que los mandamientos –es decir, la fuerza normativa de la religión– perdió su fuerza, y la ley civil y laica no ha sido suficientemente internalizada por la mayoría de la población. Las leyes tienen sentido si las viven las personas, pero la gran cantidad de leyes –que por lo general son muchas en la región– han sido desarrolladas por una élite que a veces las conoce, pero ciertamente no llegan al grueso de la sociedad como un mecanismo regulador de la vida.

Entonces, el mecanismo de control social penal actúa exclusivamente como un mecanismo punitivo. Como la impunidad es tan alta y las posibilidades de ser castigado son bajas, la norma reguladora expresada en la ley tiene muy poca función como amenaza disuasiva y mucho más como realidad punitiva. En las entrevistas a jóvenes recluidos por homicidios, resulta sorprendente observar cómo matar a una persona no les significa conflicto moral alguno. Por lo general, los homicidas que hemos investigado tienen más temor de la venganza –la culebra, que llaman en Venezuela– que del castigo de la ley. Y frente a la ‘ley’ tienen más temor de los policías, o de los riesgos de la sobrevivencia en la cárcel, que del castigo de privación de libertad contemplado en la legislación.

Recapitulemos entonces. La gobernabilidad de las sociedades depende tanto del consenso social como de la capacidad del Estado y del mercado de satisfacer demandas. En América Latina encontramos que no hay consenso social por los problemas de sociabilidad descriptos y las incapacidades del control social tradicional o penal. Pero tampoco hay capacidad del Estado ni del mercado de satisfacer las demandas.

La incapacidad de satisfacer las demandas por parte del mercado está relacionada con la imposibilidad de ofrecer empleo, salarios, alimentación, vivienda y salud a sectores importantes de la población. Este déficit es grande y creciente, tal y como ha sido referido previamente por informes de organismos internacionales. Pero el Estado tampoco tiene la posibilidad de satisfacer las demandas mínimas de la población en el área de seguridad personal. El Estado como institución en América no ha tenido la capacidad para controlar la creciente epidemia de homicidios desde los años 80, ni ha podido ofrecer seguridad y un ejercicio del estado de derecho a porcentajes importantes de la población. Esto significa que no ha tenido capacidad real de arrebatar el ejercicio de la violencia a la sociedad y de garantizar su monopolio. Esa incapacidad tiene expresiones muy claras en vastas zonas de Colombia, por la presencia de

grupos guerrilleros o paramilitares, o en segmentos del Amazonas controlados por las mafias de la droga. Pero no es menos verdad en muchas zonas pobres de las ciudades, en las favelas de Brasil, las comunas de México o los pueblos jóvenes de Lima, donde no hay actividad de esas grandes organizaciones, sino de las bandas encargadas de la distribución minorista de la droga, o de la venta de objetos robados (Franco, 1999). Ahora bien, este fenómeno también ocurre en espacios territoriales muchos más amplios, pues el Estado ha sido incapaz de controlar la posesión y portación de armas de fuego por ciudadanos honestos o delincuentes, y no digamos de su incapacidad para aplicar lo que sería una política de desarme de la población (Pnud, 2003). Simplemente no tiene cómo autorizar o prohibir efectivamente la distribución de armas de fuego.

Ante esa incapacidad del Estado de ofrecer seguridad a la población y de aplicar adecuadamente el sistema de control social penal, se presentan dos respuestas importantes. Por un lado, la población asume la protección personal en forma privada (armándose, con guardias privados) y toma la ley por su propia mano (linchamientos, grupos de exterminio). Por el otro, se incrementan las acciones extrajudiciales de la policía, apoyando los grupos de exterminio o torturando y castigando físicamente a los delincuentes. Si bien el apoyo ciudadano a este tipo de acciones, fuera del estado de derecho, es minoría en las encuestas que se hacen en América Latina, es significativo que entre un 20% y 30% de los encuestados la apoyen a conciencia de su ilegalidad. Lo que sí parece seguro es que este tipo de respuestas, lejos de reducir la violencia en la sociedad, la incrementa de un modo y magnitud siempre difícil de predecir.

Tabla 4 - Aprobación de acciones extrajudiciales en ciudades seleccionadas de América Latina

	Aprueba matar al individuo que violó a su hija	Aprueba el linchamiento de individuo que aterroriza a la comunidad	Aprueba las limpiezas sociales por grupos de exterminio
Bahía, Brasil	57,6	34,9	15,9
Cali, Colombia	36,4	nd	13,2
Caracas, Venezuela	48,4	32,6	20,5
Río de Janeiro, Brasil	41,7	25,9	10,6
San José, Costa Rica	30,8	14,4	8,2
San Salvador, El Salvador	38,9	21,8	15,6
Santiago, Chile	53,8	19,7	5,8

Fuente: Briceño-León, Ávila & Camardiel, 2002, Cuadro 1.

## VIOLENCIA Y SALUD PARA TODOS

Hace varias décadas, la OMS se planteó ofrecer salud para todos como meta deseable. Pero la meta ha resultado imposible de alcanzar en muchas áreas: a los antiguos retos y dolencias se les ha agregado la violencia como un obstáculo importante para las metas de salud. Sólo en muertes, la violencia general produjo 1,5 millones de víctimas en el año 2000. Ahora bien, las guerras –símbolo más evidente de la violencia– representaban apenas el 18 % de esa cifra, mientras que los homicidios contribuían con el 31% (WHO, 2002).

¿Cómo es posible alcanzar una meta de salud para todos con los problemas de sociabilidad y gobernabilidad que hemos planteado? No habrá manera de plantearse metas sustantivas de salud si no se logran transformaciones importantes en la sociedad. La meta de salud para todos no será posible si no obtenemos al mismo tiempo sociedad para todos, es decir, un modo en que podamos vivir juntos con las desigualdades y diferencias que tengamos. Claro que esto implica modos determinados de tramitar las diferencias y superar las desigualdades, pero estando juntos sin matarnos.

Los grandes problemas contemporáneos de la salud se han debido a cambios en la sociedad, y sus soluciones tienen que pasar por más cambios en las mismas sociedades (Briceno-León, 2000). Esto no es menos verdad para la superación de la violencia, pero los cambios sociales en el mundo actual atraviesan por una crisis muy similar a los sistemas que han imperado. Los modelos del socialismo y del neoliberalismo no han funcionado, pero se reconocen fuerzas y debilidades en estas dos aproximaciones, y la búsqueda de un camino sostenido por el bienestar de las mayorías excluidas o menguadas atraviesa caminos inéditos.

Hoy en día es claro que sin crecimiento económico no habrá modo de superar la pobreza y la exclusión. También, que el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente, pues se requiere además un modo de crecer y una redistribución que garanticen que el beneficio llegue a todos, y que los daños por crecer no sean superiores en el ambiente y en los individuos a los beneficios económicos que reporten.

Además, se requieren cambios que no son económicos, sino que se refieren a la vida en sociedad y la política, a lo que hemos llamado sociabilidad y gobernabilidad. La violencia es una interacción, es un modo de comunicación y relación entre personas, pero es un modo enfermo de estar juntos. La construcción de un modo no-violento de convivir y resolver los conflictos, un modo de hacer un gobierno para todos, podrá acercarnos a la construcción, como decía Kant, de una paz perpetua. Y los avances en este camino, por distantes que puedan parecer, habrán de ser una contribución mayor a la salud pública de América Latina.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRICEÑO-LEÓN, R. Bienestar, salud pública y cambio social. In: R, Briceño-León, MINAYO M. C. de S. & COIMBRA JR., C. E. A. (Coords.) *Salud Y Equidad: una mirada desde las ciencias sociales*. Río de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000.
- BRICEÑO-LEÓN, R.; ÁVILA, O. & CAMARDIEL, A. La violencia doméstica en Caracas: predictores sociales y culturales. *Acta Científica Venezolana*, 49:248-259, 1998.
- BRICEÑO-LEÓN, R.; ÁVILA, O. & CAMARDIEL, A. El derecho a matar en América Latina. In: BRICEÑO-LEÓN, R. (Comp.) *Violencia, Sociedad Y Justicia en América Latina*. Buenos Aires: Clacso, 2002.
- CEPAL. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2002-2003*. Santiago de Chile: Cepal, 2003.
- CRUZ, J. M. & PORTILLO, N. *Solidaridad y Violencia en las Pandillas del Gran Salvador: más allá de la vida loca*. San Salvador: UCA Editores, 1998.
- FRANCO, S. *El Quinto: No Matar. Contextos explicativos de la violencia en Colombia*. Bogotá: Iepri, Universidad Nacional, Tercer Mundo Editores, 1999.
- GERMANI, G. *Política y Sociedad en una Época en Transición*. Buenos Aires: Paidós, 1961.
- IUDOP, ERIC, IDESO & EDIES. *Maras y Pandillas en Centro América*. Managua: UCA Editores, 2001. Vol. 1.
- LONDOÑO, J. L. & GUERRERO, R. Violencia en América Latina: epidemiología y costos. In: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. *Asalto al Desarrollo, Violencia en América Latina*. Washington, D.C.: BID, 2000.
- MÁRQUEZ, P. *The Street Is my Home*. Stanford: Stanford University Press, 1999.
- MURRAY, C. L. J. & LÓPEZ, A. D. *The Global Burden of Disease*. Harvard: University Press, 1996.
- OIT. *Panorama Laboral 2002*. Santiago de Chile: OIT, 2002.
- OIT. *Proyecto de Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre la Violencia y el Estrés en el Sector Servicios: una amenaza para la productividad y el trabajo decente*. Ginebra: ILO, 2003.
- OPS. *Repercusiones de la Violencia en la Salud de las Poblaciones Americanas*. Washington: OPS, 2003. CD44/15.
- PNUD. *Armas de Fuego y Violencia*. San Salvador: Pnud, 2003.
- PNUD/AVESA. *Violencia de Género contra las Mujeres: situación en Venezuela*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1999.
- SANTACRUZ, M. & CONCHA-EASTMAN, A. *Barrio Adentro: la solidaridad violenta de las pandillas*. San Salvador: Iudop-OPS, 2001.
- SANTACRUZ, M. & PORTILLO, N. *Agresores y Agredidos: factores de riesgo de la violencia juvenil en las escuelas*. San Salvador: Iudop, 1999.
- WHO. *Injury, a Leading Cause of the Global Burden of Disease*. Geneva: WHO, 1999.
- WHO. *World Report on Violence and Health*. Geneva: WHO, 2002.
- ZUBILLAGA, V. *Entre Hombres y Culebras: devenir un homme et se faire respecter dans un barrio d'une ville latinoaméricaine*. Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvain, 2003.
- ZUBILLAGA, V. & BRICEÑO-LEÓN, R. Exclusión, masculinidad y respeto: algunas claves para entender la violencia entre adolescentes en barrios. *Nueva Sociedad*, 173:34-78, mayo-jun. 2001.